

*Espacios de contestación: desafíos, actores y expertise en la administración de la seguridad urbana en Grecia**

Sappho Xenakis** y Leonidas K. Cheliotis***

A lo largo de los últimos años, la seguridad urbana emergió como una de las principales prioridades en la vida pública y política en Grecia, y especialmente desde que el país cayó en la crisis financiera en 2009. Este artículo ofrece un panorama sin precedentes de los desafíos, actores y expertise en la administración de la seguridad urbana en Grecia, llamando la atención de las tensiones políticas que los rodean. La primera sección se enfoca en los fenómenos considerados como desafíos fundamentales para la seguridad urbana en el país: desde el delito común, inmigración y pobreza urbana y degradación, hasta la agitación social, policiamiento, milicias de extrema derecha y vigilantismo. Asimismo, son esbozados los distintos actores estatales y no estatales comprometidos en la administración de la seguridad urbana, a la vez que es analizada críticamente la relación entre la expertise y los procesos oficiales de formulación de políticas. Las formas objetivas y subjetivas de inseguridad han mostrado ser altamente contenciosas, las respuestas a tales inseguridades producen inseguridades en su propio derecho, y las restricciones sobre la expertise no técnica son identificadas como limitantes del alcance de la política estatal pertinente.

PALABRAS CLAVE: Expertise y elaboración de políticas - Milicias de extrema derecha - Inmigración - Policiamiento - Pobreza urbana y degradación.

Urban security has emerged as one of the key priorities in political and public life in Greece over recent years, and especially since the country fell into financial crisis in 2009. This article offers an unprecedented overview of the challenges, actors and expertise in the management of urban security in Greece, drawing attention to the political tensions that envelop them. The first section focuses on the phenomena considered to constitute core challenges for urban security in the country: from common crime, immigration and urban poverty and degradation, to social unrest, policing, far-right militias and vigilantism. The various state and non-state actors engaged in the management of urban security are then outlined, and the relationship between expertise and official policy-making is critically assessed. Objective and subjective forms of insecurity are shown to be highly contentious, responses to such insecurities are found to produce insecurities in their own right, and constraints upon non-technical expertise are identified as limiting the scope of pertinent state policy.

KEYWORDS: Expertise and policy-making - Far-right militias - Immigration - Policing - Urban poverty and degradation.

* Originalmente publicado como 'Spaces of Contestation: Challenges, Actors and Expertise in the Management of Urban Security in Greece' en *European Journal of Criminology*, 10(3): 297-313.

Traducción realizada conjuntamente por Martín Gendler y Federico Luis Abiuso (Universidad de Buenos Aires).

** Centre for Sociological Research on Law and Penal Institutions (CESDIP)/Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia.

*** Profesor adjunto de Criminología en el Departamento de Política Social, London School of Economics and Political Science - University of Edinburgh, UK.

A diferencia de Europa Occidental, la urbanización en Grecia ha sido moldeada por su tardía y parcial experiencia de industrialización y por su débil tradición de provisión estatal welfarista. La polarización socioeconómica y espacial ha sido influida por el hecho de que Grecia conserva proporcionalmente uno de los sectores autónomos más grandes de la Unión Europea, y que mantuvo uno de los mayores niveles de pobreza y desigualdad en la región, con uno de los peores registros de reducción de pobreza mediante transferencias sociales (Cheliotis y Xenakis, 2010). La movilidad residencial ha estado limitada por altos niveles de propiedad de viviendas y por la necesidad de bienestar familiar, la cual, junto a la comparativamente escasa provisión de viviendas sociales, ha servido para inhibir la creación de guetos. Incluso en Atenas, donde, desde fines de los noventa, la presencia de los inmigrantes experimentando privación ha estado más concentrada, los patrones de trabajo autónomo y la flexibilidad limitada en el stock de viviendas llevaron a menores niveles de segregación que los vividos por inmigrantes en otras partes de Europa (Maloutas, 2009; Arapoglou y Maloutas, 2011).

Sin embargo, la composición mixta del entorno urbano no ha prevenido la estigmatización o el conflicto social. En cambio, la misma visibilidad de los grupos marginalizados al interior de los centros urbanos se ha convertido en un punto focal para la securitización política y la inseguridad pública, a medida que aumentan las tensiones socioeconómicas. Las crecientes tasas de desempleo y de endeudamiento de las economías domésticas, así como el impacto de la crisis financiera y de las medidas de austeridad desde 2009, han elevado la polarización socioeconómica y han provocado un intensificado interés político y público en la administración de los desafíos de la seguridad urbana. Tales preocupaciones han interesado principalmente a Atenas: la capital griega es el centro del poder político y un punto de convergencia para manifestaciones públicas y huelgas, así como el corazón simbólico del país, casa de monumentos tales como la Acrópolis, que es posiblemente el más emblemático de la identidad nacional griega. Al mismo tiempo, las tensiones socioeconómicas al interior de la metrópolis se volvieron más marcadas, con clases profesionales y directivas convergiendo en municipios nororientales, empleados y vendedores dirigiéndose a distritos del sur, y los trabajadores de servicios inmigrantes desplazándose hacia dentro de los distritos centrales, sureños y norteños. A pesar del hecho de que las tendencias de suburbanización, la polarización socioeconómica en el centro de la ciudad y las inquietudes conexas sobre la degradación urbana y el delito son anteriores a la inmigración masiva de los 90s, aquellas clases medias incapaces o poco dispuestos a mudarse desde el centro de la

ciudad han forcejeado crecientemente con la estigmatización y la inseguridad vinculadas a vivir junto a inmigrantes (Kandylis y Kavoulakos, 2011).

En este artículo reseñamos los fenómenos que consideramos que constituyen los desafíos fundamentales para la seguridad urbana en Grecia—delito común, inmigración, pobreza urbana y degradación, agitación social, policiamiento, milicias de extrema derecha y vigilantismo— tal como son concebidos por diferentes circunscripciones al interior del país, prestando especial atención al contexto ateniense. A continuación, esbozamos el abanico de agentes claves—estatales y no estatales—comprometidos en la administración de la seguridad urbana en Grecia, y ofrecemos una descripción sin precedente de la relación entre la expertise y la formulación de política oficial en este ámbito. Las formas objetivas y subjetivas de inseguridad han mostrado ser altamente contenciosas, las respuestas a tales inseguridades producen inseguridades en su propio derecho, y las restricciones sobre la expertise no técnica son identificadas como limitantes del alcance de la política estatal pertinente.

Desafíos de la seguridad urbana en Grecia

Delito común

Grecia se ha posicionado entre los países que más temen al delito en Europa y más allá de ella, desde su inclusión hacia comienzos de los años 2000s en análisis pertinentes de matriz internacional y comparativa. Conjuntamente con las tasas de temor a la victimización delictiva, las preocupaciones públicas en torno el delito como un problema nacional en Grecia han llegado a exceder el promedio de la Unión Europea, y se han estabilizado en una tasa extraordinariamente alta. El discurso político y de los medios de comunicación, en el centro y en la extrema derecha de la arena política, han asociado fuertemente los riesgos del delito común con el entorno urbano, y los niveles y patrones del delito común al interior de la capital han sido el contundente foco de dicha atención (Xenakis y Cheliotis, 2013).

Por un lado, Grecia ha visto un aumento significativo en algunas modalidades de delito común, desde el comienzo de la crisis financiera del país en el 2009. Entre ese año y el 2011, por ejemplo, el volumen anual total de robos y hurtos creció en un 33,3%, de 72,658 a 96,925, y la tasa de robos y hurtos cada 1000 habitantes se elevó en un 32,8%, de 6,4 a 8,5. Durante el mismo periodo, el volumen anual total de asaltos aumentó en un 40,9%, de 4708 a 6636, mientras que la tasa de asaltos por cada 1000 habitantes se elevó en un 41,4%, de 0.41 a 0,58 (Xenakis y Cheliotis, 2013).

Por otro lado, algunos tipos de delitos violentos (por ejemplo, violación) han caído desde el comienzo de la crisis

financiera, mientras que los aumentos en otros delitos violentos (por ejemplo, homicidio) resultaron haber sido menos marcados cuando fueron expresados en términos absolutos y en tasas por unidades de población, y cuando eran comparados con el periodo pre-crisis (Xenakis y Cheliotis, 2013). Más aún, de acuerdo a los últimos datos comparables, las tasas de propiedad común y delito violento en Grecia permanecieron moderadas por los estándares europeos. (UNODC, 2012; ver además, Xenakis y Cheliotis, 2013; Cheliotis y Xenakis, 2011).

Inmigración

En las últimas dos décadas, la inmigración ha sido comúnmente considerada como un desafío de la seguridad en Grecia, tanto por centristas como por aquellos que se posicionan en la extrema derecha del espectro político. Los crecientes niveles de xenofobia entre los griegos han apoyado políticas y prácticas que asocian a los inmigrantes con riesgos delictivos, culturales, étnicos y de seguridad nacional, y tales asociaciones han sido condensadas en los modos en que la presencia de inmigrantes en los centros urbanos fue enmarcada discursivamente.

Las preocupaciones entre el público sobre la relación entre inmigrantes y delito han estado impulsadas en gran parte por el discurso político y de los medios de comunicación, apuntando a la significativa sobre-representación de personas no griegas en las estadísticas de delito registradas por la policía y en la población penitenciaria del país. En 2011, por ejemplo, mientras que los inmigrantes constituían un 11% estimado de la población total en Grecia, la proporción de no griegos entre todos los delincuentes conocidos por la policía se mantuvo en 43,7% para robos y hurtos, en 54% para asaltos, y en 41,3%, homicidios (Xenakis y Cheliotis, 2013). Mientras tanto, de acuerdo a datos instantáneos del Ministerio de Justicia griego, los no griegos conformaban el 63,2% de la población penitenciaria del país el 1 de enero de 2012 (Cheliotis, 2013).

La sobrerrepresentación de los inmigrantes en las estadísticas delictivas registradas por la policía y en la población penitenciaria en Grecia no puede ser explicada sin la referencia a los fuertes prejuicios anti-extranjeros que se han encontrado entre los ciudadanos griegos, en las prácticas policiales y en los procesos judiciales de toma de decisiones. La investigación ha demostrado, por ejemplo, que los ciudadanos griegos son más propensos a denunciar los delitos a la policía cuando se cree que los delincuentes son inmigrantes; que la policía sobrevigila sistemáticamente comunidades inmigrantes, incluyendo la realización de operaciones denominadas de 'barrido' o 'limpieza', y que tiende a cachar y arrestar personas no griegas con una regularidad significativamente mayor que respecto

a aquellas griegas; y es más probable que el poder judicial apruebe sentencias de prisión —y penas de prisión más largas en ese caso— cuando el delincuente no es de origen griego (Cheliotis y Xenakis, 2010, 2011).

Otro factor decisivo que ha contribuido a la asociación entre inmigración y delito en Grecia es que una considerable proporción de los inmigrantes que residen en el país son indocumentados. En el 2011, por ejemplo, de un total estimado de 1.239.472 inmigrantes en Grecia, se cree que 390.000, o el 31,5%, no se encontraban registrados (ver Maroukis, 2012). Así, los migrantes irregulares son criminalizados por ser indocumentados, a pesar del hecho de que el Estado griego asume una significativa responsabilidad por la magnitud de la población migrante indocumentada, habiendo evitado sistemáticamente la instauración de un sistema eficaz y oportuno de tramitación de las solicitudes de asilo y residencia (CPT, 2011; Campaign for Access to Asylum in Greece, 2012). De hecho, para el 2012, la mitad de los presos no griegos estaban siendo encerrados en relación a violaciones de las reglas y regulaciones migratorias. Además, las categorías legales e ilegales de inmigrantes han sido regularmente confundidas por comentaristas de todo el centro y de la extrema derecha del espectro político.

Aparte de la identificación de los inmigrantes con la criminalidad, la inseguridad pública de los griegos en torno a los inmigrantes tiene una dimensión ontológica que refleja el sentimiento difundido de que la magnitud de la población inmigrante en el país constituye una amenaza para la integridad cultural y étnica de la nación griega. Los grupos migratorios se han vuelto cada vez más concentrados en los centros urbanos, especialmente en Atenas, donde muchos residentes griegos han recibido de otra manera los rasgos cosmopolitas del multiculturalismo —en lo que refiere a restaurantes y arte, por ejemplo— y también han disfrutado de buena gana los servicios ofrecidos por el trabajo migrante. Sin embargo, al mismo tiempo, la misma presencia y expansión de diversas comunidades raciales —y de comunidades migrantes de piel oscura de Asia y África, más particularmente— en el histórico e hiper simbólico corazón de la ciudad capital ha sido discordante para una sociedad fuertemente nacionalista, con una tasa de natalidad marcadamente decreciente (ver, Kandylis y Kavoulakos, 2011; Danopoulos y Danopoulos, 2004).

Las distinciones religiosas han probado ser igualmente alarmantes, al ser retratadas, tanto por la Iglesia como por aquellos que se encuentran al centro y en la extrema derecha del espectro político, como una amenaza combinada a la cultura y a la seguridad nacional. Atenas es la única capital europea que no alberga una mezquita financiada por el Estado, debido a la oposición sostenida (más eminentemente desde la Iglesia Ortodoxa Griega) en el terreno de las amenazas al país,

tanto culturales como físicas, que pudiera estimular (Karyotis y Patrikios, 2009; ver, además, Tzanelli, 2011)¹. Mientras tanto, las congregaciones de oración que tienen lugar en las plazas públicas atenienses han sido descritas como manifestaciones ominosas de poder por parte de los musulmanes, que también señala supuestamente el riesgo de que los ‘micro estados’ islámicos extremistas emerjan al interior de las ciudades griegas (ver, por ejemplo, Lambropoulou, 2012), y las congregaciones de oración organizadas en ámbitos privados e informales han sido tratadas con sospecha por encubrir potencialmente al terrorismo (ver, por ejemplo, Kostakos, 2007).

“Las crecientes tasas de desempleo y de endeudamiento de las economías domésticas, así como el impacto de la crisis financiera y de las medidas de austeridad desde 2009, han elevado la polarización socioeconómica y han provocado un intensificado interés político y público en la administración de los desafíos de la seguridad urbana.”

Pobreza urbana y degradación

Desde la emergencia de la crisis financiera en 2009, el discurso político dominante en Grecia ha combinado cada vez más los problemas del delito común y de la inmigración con otros fenómenos sociales tales como la pobreza urbana y la degradación. En el periodo previo a las elecciones nacionales de mayo y junio de 2012, por ejemplo, los partidos centristas PASOK [Movimiento Socialista Panhelénico] (centro-izquierda) y Nueva Democracia (centro-derecha) coincidieron con aquellos que se ubicaban en la extrema derecha, al vincular los riesgos de asalto y robos a las condiciones precarias de vida de los inmigrantes y a la presunta amenaza planteada por estos últimos a la salud pública. Desde las elecciones, la coalición gobernante (principalmente compuesta por Nueva Democracia y PASOK) ha manifestado una continua tendencia a enmarcar discursivamente a la pobreza urbana y a la degradación como problemas tradicionales de orden público. El discurso político ha servido de ese modo para fomentar una intensificada

¹ En octubre de 2012, se informó que los planes del Estado griego de construir una mezquita en Atenas han sido indefinidamente aplazados, debido a la crisis financiera del país (*Hurriyet Daily News*, 2012).

inseguridad entre el público, el cual ha interpretado los indicios de deterioro de ‘bienestar comunitario’ y ‘calidad de vida’ como señalización de un elevado riesgo de victimización delictiva (Xenakis y Cheliotis, 2013).

Una preocupación fundamental ha sido el aumento de las personas sin hogar en Atenas, estimada más recientemente alrededor de 13.000 personas. Entre ellos hay muchos inmigrantes y drogodependientes, pero dicha población ha incluido además crecientes números de griegos de clase media que han caído en bancarrota (EC, 2012). Estas personas sin hogar constituyen sólo algunos de los 28.000 residentes de Atenas que, en 2012, se estima que estaban recibiendo provisiones diarias de alimentos por parte de comedores municipales y financiados por la Iglesia. Del mismo modo, el consumo problemático de drogas ha sido una cuestión que atrajo significativa atención política y pública. El fenómeno se ha vuelto más visible en los centros urbanos griegos, a la manera en que las reducciones drásticas en el financiamiento estatal para las agencias fundamentales de rehabilitación de drogas han empujado más individuos a buscar o seguir un tratamiento de drogadicción en las calles de la ciudad. Las ‘barridas’ policiales de las áreas urbanas centrales también han elevado la visibilidad de los drogodependientes, al desplazarlos al interior de nuevos distritos y barrios. Sin embargo, y a pesar de la alarma que todo esto ha suscitado, el consumo problemático de drogas permanece muy bajo por comparación europea, e incluso descendió de 2009 a 2010, mientras el volumen anual de delitos registrados relacionados con drogas y el correspondiente número de personas acusadas también decrecieron en el país después de 2009 (Xenakis y Cheliotis, 2013).

En lugar de retratar los problemas de la pobreza urbana y la degradación como fenómenos que generan o exacerbaban la inseguridad entre el público general, las organizaciones benéficas y los partidos políticos más izquierdistas han enmarcado estos desafíos como unos que afectan a los más marginados en sí mismos, al enfatizar también el modo en que las políticas estatales han acentuado tales perjuicios. De modo ilustrativo, el nivel de degradación en las ciudades griegas ha sido descrito por organizaciones no gubernamentales (ONGs) y por Syriza [Coalición de la Izquierda Radical], el principal partido de izquierda de la oposición en Grecia, como estando al borde de una crisis humanitaria. El aumento de más del 26% de la tasa de desempleo y una tasa de pobreza que ha superado el 30% (ajustado a la inflación), los recortes al gasto público en salud y bienestar, han producido un pronunciado aumento en los resultados sanitarios negativos, tales como incrementos de malaria y tuberculosis, así como tasas elevadas de suicidio (ELSTAT, 2012; Matsaganis, 2012; Xenakis y Cheliotis,



2013). Además, la crisis financiera y las medidas de austeridad posteriores han limitado severamente el rol que las familias tradicionalmente han podido desempeñar en el apoyo a sus miembros, en un país donde las redes del Estado welfarista han sido desde hace mucho tiempo mínimas. Esto ha hecho a los individuos vulnerables más propensos a buscarlas por sí mismos en las calles, donde enfrentan graves riesgos a su salud y seguridad.

Agitación social

La agitación social en los núcleos urbanos, y en Atenas en particular, ha sido otra preocupación fundamental para políticos centristas y de extrema derecha, quienes han acusado comúnmente a Syriza de alimentar la violencia anarquista². En términos más generales, se ha creído que la combinación del desempleo desenfrenado de los jóvenes (que había alcanzado el 58% en agosto de 2012; ELSTAT, 2012) y una presunta 'cultura institucionalizada de simpatía' hacia las políticas anti-sistémicas (ver, por ejemplo, Andronikidou y Kovras, 2012) opera como combustible. Las presunciones de que el país ha estado al borde de la

2 Sobre las distinciones en Grecia entre la agitación social y los ataques perpetrados por grupos encubiertos auto-identificados como anarquistas y extremistas izquierdistas, ver Xenakis (2012). Mientras que el país experimentó un aumento en estos ataques entre 2008 y 2010, su número cayó dramáticamente en 2011, cuando sólo ocurrieron 6, siendo estos casos no letales y sólo uno de los cuales causó lesiones menores (Xenakis y Cheliotis, 2013).

agitación masiva constante han emergido superficialmente para ser apoyadas por estallidos reiterativos de desorden público. Menos de un año antes de la crisis financiera, Grecia experimentó su peor disturbio durante décadas. Desencadenadas por el fusilamiento letal de un adolescente por parte de un funcionario policial en Atenas, semanas de sentadas, movilizaciones y choques entre los manifestantes y la policía tuvieron lugar en todo el país en diciembre del 2008. Desde el 2009, el desorden ha sido repetidamente estallado en las ciudades cada vez que el parlamento griego voto su aprobación de las medidas de austeridad requeridas para asegurar el apoyo financiero internacional. Los costos de tales disturbios han sido interpretados tanto en términos simbólicos como financieros, siendo destruidos en los centros urbanos durante los tumultos edificios históricos y de negocios. Sin embargo, para el invierno de 2012, no ha existido una réplica a los disturbios de un mes de duración de diciembre de 2008. Desafiando las predicciones del sentido común y las declaraciones sensacionalistas de políticos y periodistas, en los años siguientes al estallido de la crisis financiera, el desorden público se ha posicionado en una escala mucho menor que la que precedió a la crisis (Xenakis y Cheliotis, 2013). Un factor que probablemente haya desempeñado un rol importante en el aplacamiento de la agitación ha sido el aumento, registrado desde el inicio de la crisis financiera, en la coerción estatal, tal como discutiremos más adelante.

Policiamiento

La policía griega ha estado fuertemente asociada con la inseguridad por la casi totalidad del espectro político: los partidos que se ubican en el centro y en la extrema derecha han reprochado un alto grado de inseguridad urbana en la restricción e ineficacia excesivas de la policía en enfrentar al delito, mientras que aquellos que se sitúan en la izquierda, así como las ONGs, han acusado a la policía de estimular el delito y la inseguridad por una vigilancia policial selectiva y por demostrar una discreción inadecuada en el uso de la fuerza.

Las perspectivas centristas y de extrema derecha han vinculado en gran parte la seguridad urbana con el riesgo percibido de victimización delictiva en materia de delitos comunes, tales como asaltos y robos, y con el tamaño de la población inmigrante, especialmente aludiendo al número de inmigrantes que tienen estatuto irregular. En la medida en que se cree que la criminalidad y la inmigración han aumentado, la policía ha sido regañada por fallar en tomar suficientes medidas contra el delito y los delincuentes. Años recientes han visto el debilitamiento de la confianza pública en la ‘lucha contra el delito’ de la policía, y un creciente escepticismo del público en torno a la efectividad del policiamiento barrial (Cheliotis y Xenakis, 2011; ver, además Hough et al., 2013).

De modo similar, los partidos izquierdistas y las ONGs han sugerido que la policía contribuyó a los niveles de victimización delictiva por su pasividad, pero el foco de su preocupación ha sido la inactividad policiaca hacia los asaltos violentos perpetrados por milicias de extrema derecha y grupos paramilitares (discutidos en el siguiente apartado), donde los inmigrantes y los izquierdistas han sido el blanco. Ha habido crecientes alegatos de simpatía policial hacia, y en complicidad con, la violencia de extrema derecha, incluyendo instancias en las cuales los asaltos tuvieron lugar en frente de una policía inactiva. La inseguridad ha sido exacerbada por las reacciones típicas ofrecidas por la policía y por el Ministerio de Orden Público y Protección Ciudadana a las críticas de tal pasividad policial: ninguna respuesta oficial, una negación general, una promesa de una investigación interna, o incluso un grado de apoyo (AI, 2012; Neoi Fakeloi, 2012).

Asimismo, los izquierdistas y las ONGs han criticado reiteradamente a la policía por su frecuente y excesivo uso de la fuerza, y han hecho campaña contra la impunidad que el Estado muestra hacia dichas prácticas. De acuerdo a ONGs tales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, la intimidación policial de ciudadanos ha ido en aumento, con incidentes de abuso de violencia hacia manifestantes pacíficos y periodistas, durante y luego de que las movilizaciones en los centros urbanos vean un significativo aumento a lo largo de los últimos años. Los patrones de

negación oficial u ofuscación en la respuesta a las denuncias de abuso han intensificado los sentimientos de inseguridad (ver, por ejemplo, AI, 2012; Basille y Kourounis, 2011). Igualmente, las preocupaciones no solo emergieron en torno al alcance y a la intensidad de las operaciones policiales de ‘barrido’ contra los inmigrantes, sino también por el ‘doble discurso’ en el cual estas acciones son caracterizadas oficialmente como diseñadas para restituir los derechos humanos de los inmigrantes ilegales (SKAI, 2012).

Adicionalmente, más allá de una asociación entre prácticas de intimidación y abuso, la policía ha sido identificada ella misma como instigadora y motor del desorden social. Los tumultos desatados en diciembre de 2008 fueron considerados entre los izquierdistas como una evidencia del impacto devastador de una preparación excesiva para usar la fuerza existente al interior de la policía griega. Más en general, el uso típico de la fuerza para disipar las manifestaciones masivas —ya sea mediante el despliegue de gas lacrimógeno, balas de goma, granadas de aturdimiento, y más recientemente, cañón de agua— ha sido visto como provocando represalias violentas entre la policía, por un lado, y jóvenes anarquistas y de extrema izquierda, por el otro (Xenakis, 2012).

Milicias de extrema derecha y vigilantismo

Quizás el problema de seguridad urbana más desafiante que enfrenta hoy Grecia es la presencia de violentas milicias de extrema derecha y pandillas en las ciudades del país. Las ONG han hecho campaña desde hace mucho tiempo para que la violencia organizada de extrema derecha sea reconocida y tratada por el Estado como una amenaza para la seguridad de las personas que viven y trabajan en los centros urbanos, así como al orden público en general. Los gobiernos centristas sucesivos han tendido a refutar o minimizar el problema y, sin embargo, han sugerido que tales grupos plantean un desafío inaceptable en la medida en que representan esfuerzos ilegítimos para sustituir a la policía.

Desde 2009, la escalada de la violencia racista en Grecia ha sido caracterizada como la más pronunciada en Europa por las ONGs. Sólo en los primeros seis meses de 2011, las ONGs en Atenas afirmaron haber registrado al menos a 500 víctimas de ataques racistas. A finales de 2012, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados describió el nivel de violencia racista como ‘alarmante’, y la Embajada de los Estados Unidos en Atenas tomó la medida excepcional de advertir a los ciudadanos estadounidenses residentes o viajando a Grecia de un mayor riesgo de ataque para aquellos cuyo aspecto, tez o complexión podría llevarlos a ser percibidos como inmigrantes extranjeros (Xenakis y Cheliotis, 2013; US Embassy in Athens, Greece, 2012).

Lejos de surgir en la crisis financiera de 2009, la violencia de los grupos de extrema derecha ya había aumentado constantemente a lo largo de los años 2000, dirigiéndose abrumadoramente a los inmigrantes, pero también a los grupos de izquierda y anarquistas (HLHR et al., 2010). Para 2009, los pelotones de extrema derecha de 30-40 hombres uniformados armados con palos habían establecido una presencia regular, sin ser enfrentados por la policía, patrullando barrios inmigrantes de Atenas, intimidando a comerciantes locales y residentes y realizando ataques violentos contra inmigrantes y sus propiedades. Otros ataques violentos contra los inmigrantes y sus propiedades han sido llevados a cabo por grupos más pequeños de vigilantes. Los comentarios de los medios de comunicación han sugerido con frecuencia que tanto los pelotones como los grupos más pequeños están formados por miembros del partido de extrema derecha Chrysi Avyi ('Amanecer Dorado'), sobre todo porque a menudo se dice que los perpetradores suelen vestir de negro, el color del partido. Aunque Chrysi Avyi ha utilizado imágenes de la participación de sus parlamentarios y otros miembros del partido en los ataques a los puestos de mercado de los comerciantes inmigrantes con propósitos de propaganda, sin embargo, el partido ha negado la responsabilidad de los asaltos que causan lesiones corporales graves (véase, además, Xenakis, 2012, Xenakis y Cheliotis, 2013).

El Estado no ha monitoreado ni registrado ni la violencia organizada de extrema derecha ni la violencia racista, lo cual es un indicador de la reticencia entre los políticos centristas que han dominado a los gobiernos griegos en las últimas décadas para reconocer la violencia organizada de extrema derecha (Xenakis, 2012). Hasta diciembre de 2010, funcionarios y fiscales del Ministerio de Orden Público y Protección Ciudadana negaron a los representantes de la ONG Human Rights Watch que la violencia racista era un problema serio o creciente (HRW, 2012). A raíz de la presión ejercida por las ONG y los medios de comunicación a lo largo de 2012 a través de la publicidad internacional de la violencia de extrema derecha en Grecia, el Ministro de Orden Público y Protección Ciudadana optó por caracterizar el fenómeno como un desafío simbólico para la policía y la ley (*Neoi Fakeioi*, 2012) y abogó por la cautela y la moderación al responder a ella, explicando:

Estamos hablando de un nuevo fenómeno. Para la policía, el terreno es desconocido. La delincuencia racista es compleja. Su resolución requiere conocer maneras completamente diferentes de percibir las cosas. Se necesita un gran cuidado y seriedad, y no debemos actuar en términos de comunicación sólo para hacer ganancias de relaciones públicas (Kathimerini, 2012).

Los esfuerzos para procesar a los autores de estos crímenes han sido extremadamente raros y no se ha promovido ninguna estrategia para proteger activamente a las posibles víctimas. Por el contrario, no sólo se han tomado medidas que efectivamente exacerban los riesgos monetarios y coercitivos que se sabe que disuaden a los inmigrantes de denunciar tales crímenes a la policía (HRW, 2012), sino que además la vigilancia de los inmigrantes parece ser central para el gobierno como forma de resolver los problemas planteados por los grupos de extrema derecha. Como señaló el Ministro de Orden Público y Protección Ciudadana en una entrevista reciente, "*si se trata el problema de los migrantes irregulares, creo que no habría mucho espacio para el fenómeno neonazi en este país*" (Financial Times, 2012).

Cartografía de actores y expertise en el ámbito de la seguridad urbana en Grecia

La gama de actores involucrados en la gestión de la seguridad urbana en Grecia ha sido tan plural como los desafíos expuestos anteriormente. No sólo los aportes de estos actores se han caracterizado por la fragmentación y la falta de coordinación general, sino que en algunos casos incluso han sido contraproducentes, en la medida en que la provisión de seguridad para algunos ha contribuido a generar inseguridad entre otros. En esta sección, reseñamos brevemente la gama de actores, tanto estatales como no estatales, involucrados en la gestión de la seguridad urbana en Grecia. Con el fin de dar alguna explicación de las debilidades de la supervisión estatal en esta área, continuaremos trazando los límites de los conocimientos especializados que conforman la política oficial pertinente.

Actores estatales

El principal actor estatal en el campo de la seguridad urbana en Grecia es la Policía Helénica, cuyo Jefe es responsable ante el Ministro de Orden Público y Protección Ciudadana. Actualmente hay alrededor de 55.000 policías en la Policía Helénica, una de las tasas más altas por cada 100.000 habitantes de Europa. Aunque los críticos han sostenido a menudo que el número de oficiales que realizan tareas de la calle es insuficiente, un número de escuadrones especiales de la policía se han establecido con el paso de los años. El papel oficial de estos escuadrones abarca, por ejemplo, la protección de los edificios públicos, las estaciones de metro y otros sitios considerados como posibles blancos de la delincuencia (Guardias Especiales), para hacer frente a los disturbios sociales (Policía Antidisturbios, o MAT), para prevenir o detener la delincuencia común en las zonas urbanas (el equipo

DIAS), proteger del vandalismo a las empresas y negocios en el centro de la capital (el equipo DELTA) y responder a las llamadas de emergencia (el equipo Zeta). En los últimos meses, los oficiales del equipo DIAS también han participado en ‘barridas’ masivas de poblaciones inmigrantes. A menudo hay solapamiento entre los roles desempeñados en el terreno por estos escuadrones (por ejemplo, el equipo DELTA ha sido empleado para romper las manifestaciones), pero los niveles de entrenamiento difieren de un pelotón a otro (por ejemplo los Guardias Especiales, quienes también realizan tareas policiales regulares, reciben sólo de 4 a 6 meses de entrenamiento).

Hasta la fecha, han habido numerosos informes de que existe una cultura de ‘policía violenta’ entre estos escuadrones, que refleja la tradición militarista más amplia del policiamiento en Grecia (véase Mawby, 2011). De hecho, en al menos una de las escuadras, muchos oficiales han trabajado anteriormente en las Fuerzas Especiales del Ejército del país (Xenakis, 2012). Además, a pesar de los tabúes de larga data derivados de la dictadura de 1967-1974 sobre el despliegue de los militares para tareas policiales regulares, el Ejército fue llamado a ayudar en la prevención de protestas contra el gobierno durante las recientes marchas nacionales en Tesalónica. En lo que se ha descrito como un avance hacia la policía preventiva y orientada a la comunidad, se introdujo un nuevo esquema a principios de los años 2000 bajo el nombre de ‘Policía del Barrio’ [Neighbourhood Police Officer], mediante el cual un par de policías patrullan e interactúan visiblemente con las comunidades locales. Hasta la fecha, sin embargo, el esquema se ha aplicado de forma inconsistente y ha abarcado las funciones tradicionales de aplicación de la ley, como las detenciones en delito flagrante. De hecho, según los informes de los medios de comunicación, existen planes para utilizar a los Policías de Barrio en operaciones de ‘barrido’ y registro masivo dirigidas a inmigrantes.

Las autoridades locales también desempeñan un papel en la gestión de la seguridad urbana. La Municipalidad de Atenas y otras autoridades municipales de todo el país, por ejemplo, organizan y dirigen operaciones policiales propias, que incluyen cada vez más tareas básicas policiales regulares, como las búsquedas. Las autoridades municipales también participan en los Consejos Locales de Prevención del Delito. La misión formal de estos Consejos incluye alentar a las comunidades locales a que apoyen activamente los programas de prevención del delito y ayuden a la policía y a otras instituciones cuyo trabajo puede contribuir a prevenir el delito (por ejemplo, unidades de rehabilitación de drogas), sin embargo, los Consejos han fracasado en general en el despegue desde su establecimiento a finales de los años noventa. Respecto a la pobreza urbana, y especialmente tras el comienzo de la crisis financiera de 2009, las autoridades

municipales han organizado comedores populares para los pobres y albergue para los sin techo.

Actores no estatales

La participación del sector privado en el ámbito de la seguridad urbana ha crecido en Grecia a lo largo de las dos últimas décadas. Los ciudadanos han invertido cada vez más en el hardware y los servicios de la industria de la seguridad privada (Cheliotis y Xenakis, 2011) y varias autoridades municipales han optado por contratar y coordinar sus operaciones policiales con compañías privadas, ya sea en términos de diseño o ejecución, lo que refuerza las percepciones generalizadas de que el policiamiento estatal en el país no es suficientemente competente.

Tales percepciones son evocadas por grupos de extrema derecha que han proclamado que su violencia está dirigida restablecer el orden en áreas como el centro de Atenas, presuntamente descuidado por el Estado. La apelación de esta retórica ha sido autocumplida, en la medida en que supuestamente la policía ha dirigido a las víctimas de delito a buscar asistencia por parte de Chrysi Avyi (ver Psarras, 2012). Las comunidades de inmigrantes a menudo han formado equipos locales de vigilancia para evitar convertirse en víctimas, ayudados a este fin por grupos de anarquistas que patrullan en motocicletas después de la caída de la noche, aunque ha habido ocasiones en que la presencia de anarquistas pudo haber servido para incitar y exacerbar, antes que disuadir, la violencia de extrema derecha.

En lo que respecta a abordar el reto de la pobreza urbana desde que la crisis financiera golpeó a Grecia, las contribuciones de los actores no estatales hasta la fecha superan con creces las de las autoridades estatales. Diversas ONG nacionales e internacionales han organizado bancos de alimentos, al igual que la Iglesia y asociaciones de izquierda y anarquistas. En la extrema derecha, Chrysi Avyi también ha organizado comedores populares, aunque sobre una base muy exclusiva —es decir, en la estricta condición de que los beneficiarios son de origen griego— registrando en formato audiovisual el proceso de distribución de comida con fines de propaganda. Finalmente, ha habido una serie de iniciativas de base en todo el país diseñadas para aliviar el impacto de la austeridad en las poblaciones locales, por ejemplo introduciendo economías de trueque a pequeña escala, aunque algunas de estas iniciativas han luchado para perdurar.

Compromiso experto y expertise

Al igual que en otros ámbitos políticos, la contribución de los expertos a la formulación de políticas sobre el orden

público en Grecia —y, en este contexto, también en materia de seguridad urbana— provienen formal e informalmente de una serie de agentes: principalmente de institutos de investigación financiados por el gobierno, académicos universitarios, expertos internos de ministerios gubernamentales, individuos o equipos de asesores ad hoc extranjeros y asesores especiales para ministros.

KEMEA (Centro de Estudios de Seguridad) es un grupo de reflexión supervisado por el Ministerio de Orden Público y Protección Ciudadana y encargado de proveer asesoramiento y recomendaciones al Ministerio y a las autoridades relacionadas en materia de política de seguridad. La institución se estableció después de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la intención explícita de aprovechar la experiencia adquirida por el personal de los servicios de seguridad como resultado de los programas de capacitación y ejercicios realizados en preparación para los Juegos. Tal como se anuncia en el sitio Web de la organización, los resultados de los investigadores de KEMEA sugieren que la pericia del personal está fuertemente ponderada en lo técnico, enfocándose en temas tales como el monitoreo de fallas en sistemas de tecnología de información y comunicación interconectados y análisis de riesgo operacional para la protección de la infraestructura nacional.

Al preparar y redactar la legislación, el Ministerio también utiliza comités *ad hoc* que reúnen expertos internos y externos, desde fiscales, altos funcionarios de policía y otros altos cargos burocráticos del Ministerio hasta miembros de las Universidades de Derecho y Sociología. La construcción de políticas dentro de estos comités tiende a ser un asunto discursivo y empíricamente escaso o ligero: incluso cuando se aborda un problema de seguridad nominalmente crítico, como las amenazas planteadas por el terrorismo y la delincuencia organizada, el trabajo del comité se ha basado en los conocimientos generales no registrados y en las suposiciones de los participantes (Xenakis, 2004). En cualquier caso, como se ha podido comprobar en relación con el Ministerio de Justicia (ver, además, Cheliotis, 2012), es probable que las posiciones internas y prácticas tiendan a ser privilegiadas sobre las de los académicos, reduciendo la influencia de una amplia expertise en la formulación de políticas. También, como se ha testimoniado con respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores (Valinakis, 2012), el personal dedicado de la administración pública interna a menudo carece de las habilidades necesarias para llevar a cabo un diseño eficaz de las políticas o para proporcionar apoyo adecuado a los ministros. Además, se sabe que la expertise de la policía es vulnerable a los cambios en el liderazgo político: se cree que las afiliaciones políticas afectan a los nombramientos de los altos cargos y, a menudo, muchos postulados se reemplazan debido a la elección de un nuevo gobierno.

La expertise extranjera también ha contribuido a la formulación de políticas en áreas específicas de preocupación dentro de la cartera del Ministerio. En el año 2000, por ejemplo, tras un ataque letal contra el Agregado Militar Británico en Atenas por una organización guerrillera, el Servicio de Policía Metropolitana de Londres proporcionó temporalmente a la Policía Helénica un gran equipo de su Departamento de Operaciones Especializadas, brindando experiencia en la recopilación y análisis de datos y estrategias de comunicación pública, así como asistencia con la investigación en curso. En 2009, un equipo más pequeño de la Policía Metropolitana visitó Atenas para asesorar al Ministerio sobre la reestructuración del Organismo Griego de Lucha contra el Terrorismo. Más recientemente, el Ministerio recibió asesoramiento sobre la policía urbana del ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y del ex jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Bill Bratton, antes de las reformas policiales que incluían la introducción de unidades de emergencia armadas con kalashnikovs para combatir los robos cometidos por grupos del crimen organizado en los centros de las ciudades. Una vez más, en el plano operacional, la policía griega participa actualmente en redes de formación europeas y en ‘webinars’ [seminarios online] cuyo objetivo es proporcionar conocimientos especializados que puedan utilizarse para modificar sus prácticas.

La contribución de los expertos al proceso de formulación de políticas también puede provenir del equipo personal de asesores que comúnmente conserva el ministro incluso cuando se traslada a otro puesto ministerial. La expertise especializada de los asesores ministeriales ha sido infrecuente, precisamente debido a sus deberes de carácter general y a la naturaleza de corto plazo de los puestos ministeriales. Una notable excepción ha sido el caso de los ayudantes que trabajan para Michalis Chrysochoidis, que han incluido expertos en la policía con sólidos antecedentes de investigación académica. Este ejemplo anómalo es el reflejo de un político que mostró particular interés y compromiso con el Ministerio. Chrysochoidis no sólo ocupó el cargo en tres ocasiones distintas, sino que su período de cuatro años de servicio ininterrumpido -entre 1999 y 2004- fue también sin precedentes y es aún inigualable.

Límites a la entrada de expertos

Como sugiere esta sinopsis, el aporte de expertos a la formulación de políticas en el Ministerio de Orden Público y Protección Ciudadana ha tenido limitaciones significativas.

El alcance de la expertise que influye en la formulación de políticas se ha reducido, en primer lugar, por el peso dado a los expertos con una visión técnica y operacional de seguridad. El conocimiento relacionado con las causas y efectos inmediatos

parece haber sido privilegiado, mientras que se ha descuidado el abordaje del contexto más amplio y las causas profundas, a la vez que no fue incorporado el conocimiento de una gama más amplia de interlocutores sociales. Es sorprendente, por ejemplo, que aunque la gestión eficaz de la seguridad urbana haya sido estrechamente identificada por el Ministerio con la gestión eficaz de las poblaciones de inmigrantes dentro de las zonas urbanas, parece que no ha habido ningún esfuerzo serio para incluir o incluso abogar por la inclusión de representantes de esas poblaciones en los procesos normativos pertinentes. Lamentablemente, la falla en el no reconocer a las asociaciones comunitarias de inmigrantes como socios potenciales en los esfuerzos estatales para proporcionar seguridad urbana puede ser sintomático del aumento de la xenofobia entre la opinión política y pública, más que un mero descuido por parte del Ministerio o de sus expertos.

En segundo lugar, cuando se ha consultado a la expertise académica no técnica, el grado en que ésta ha logrado influir en la política puede verse obstaculizado por las debilidades que pueden caracterizar a su habilidad per se. En cierta medida, estas debilidades pueden ser indicativas de las deficiencias que han afectado durante mucho tiempo a la cultura de la investigación en las universidades griegas, donde la competencia político-partidaria y el clientelismo han inhibido el desarrollo hacia estándares internacionalmente aceptados de beca (véase Pasmazoglu, 1994). Aunque ha habido progresos desde los años noventa, los avances hacia las normas europeas iniciadas por la Declaración de Bolonia de 1999 han sido lentos. Por ejemplo, la dramática expansión de las instituciones de educación superior en Grecia entre 1999 y 2004 siguió estando estructurada por demandas políticas locales y regionales y carecía de procedimientos de acreditación formales. En una fecha tan reciente como 2011, además, una proporción significativa de personal académico no estaba comprendiendo, y se resistía al cambio diseñado para implementar principios de aseguramiento de la calidad académica (Ipsilantis et al., 2012, véase, además, Papadimitriou, 2011, Keridis y Sfatos, 1998).

En tercer lugar, y como ocurre en otros ámbitos políticos, la contribución de los expertos al proceso de formulación de políticas sobre el orden público y la seguridad urbana puede limitarse en general por el patronazgo político y el clientelismo. Una pequeña y relativamente pequeña elite de expertos, entre los cuales “una clara afiliación política con un partido político particular es... común”, se ha encontrado que aparecen de manera recurrente en varios procedimientos de formulación de políticas a través del gobierno (Ladi, 2006: 63; ver también, Featherstone and Papadimitriou, 2008). Se han reportado hallazgos similares a nivel del gobierno local, donde sólo los expertos pertenecientes a un grupo de interés

afiliado al partido político del Alcalde o la red personal de los funcionarios del consejo local están incluidos en los procesos de toma de decisiones y tienen poder para influir sus resultados (Getimis y Grigoriadou, 2004). Por lo tanto, es más probable que los expertos elegidos para participar en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones estén allí por razones de conveniencia, en lugar de necesariamente contar con la experiencia más adecuada para la tarea que se está realizando.

En cuarto lugar, y lo que es más importante, los límites del aporte de conocimientos técnicos adecuados para la formulación de políticas han reflejado una falta general de apetito entre los líderes políticos para ver si se amplían las políticas orientadas a la evidencia o se incentivan políticas comunitarias. Dada la estructura fuertemente centralizada y jerárquica de los procesos de política pública en Grecia (véase, por ejemplo, Featherstone y Papadimitriou, 2008), el liderazgo ministerial desempeña un papel crucial para determinar hasta qué punto los expertos pueden tener acceso y afectar a la formulación de políticas. Incluso a nivel ministerial, la opinión de los expertos no-técnicos puede considerarse una distracción innecesaria del deber del Ministerio de reaccionar inmediatamente a los desafíos que enfrenta. Por ejemplo, el actual Ministro de Orden Público y Protección Ciudadana, durante una reciente entrevista en la que se le pidió que comentara sobre las preocupaciones del público acerca de un nexo entre delincuencia, inmigración ilegal, disturbios sociales y violentos grupos de extrema derecha que ofrecen ‘seguridad’ para los ciudadanos:

La pregunta es qué estamos haciendo al respecto; que es lo que el gobierno está haciendo al respecto, lo que las instituciones estatales están haciendo al respecto. Sin embargo, siento que no estamos quietos. No lo estamos observando simplemente; No estamos llevando a cabo análisis sociológicos; no estamos proponiendo una discusión en profundidad; y no estamos posponiendo las cosas para tratarlas a largo plazo. Estamos haciendo lo que las condiciones presentes y nuestras habilidades permiten. (*Neoi Fakeloi*, 2012)

Este relegamiento de la experiencia de los expertos sociales y no-técnicos parece formar parte de un compromiso político más amplio de retener elementos clave del modelo continental europeo de orden público, dentro del cual la delincuencia y el desorden se abordan principalmente como una afrenta a la autoridad estatal más que como síntomas de problemas de la comunidad y se responden ante todo con prácticas policiales centralizadas y militaristas sostenidas con

bajos niveles de rendición de cuentas, inferiores a los que están presentes en las tradiciones policiales anglo-americanas (véase Mawby, 2011).

Conclusión: Política y perspectivas

Tanto en la derecha como en la izquierda del espectro político en Grecia, las formas objetivas y subjetivas de inseguridad han estado disminuyendo la confianza del público en la capacidad del gobierno y las instituciones estatales para satisfacer las necesidades básicas de los individuos. En los últimos años, los datos oficiales sobre la delincuencia migratoria, por un lado, y las actitudes y prácticas xenófobas, por otro, han creado un círculo vicioso que no sólo ha impulsado a las políticas de extrema derecha sino que también ha estimulado el apoyo a las milicias de extrema derecha y grupos de vigilantes, que operan principalmente en las ciudades griegas. Al mismo tiempo, la falta de acción contra la violencia organizada de extrema derecha y el uso selectivo y excesivo de la fuerza por parte de la policía ha alimentado la inseguridad entre los inmigrantes, los grupos de izquierda y los anarquistas. Desde 2009, además, las intensas dificultades socioeconómicas se han superpuesto a un contexto en el cual la confianza en los políticos y las autoridades estatales ha estado durante mucho tiempo en niveles bajos en comparación con los niveles europeos. Dada esta combinación de desarrollos y el riesgo más amplio de desestabilización sociopolítica que sugieren, existe un claro imperativo para que el gobierno del país se asegure de que el Estado aborde efectivamente la inseguridad urbana. Con el fin de gestionar eficazmente la seguridad urbana de una manera que no conduzca a Grecia a abandonar los principios democráticos consagrados en las normas de la Unión Europea, las políticas oficiales deben restringir su dependencia de la coerción.

El gobierno del país necesita abordar la polarización socioeconómica y su potencial criminogénico trabajando para crear un crecimiento económico sostenido, incluyendo la promoción de oportunidades de capacitación y empleo para los jóvenes. Para satisfacer las necesidades básicas de los individuos, es necesario hacer una provisión social adecuada a nivel de los gobiernos nacionales y locales. Por ejemplo, dado que se sabe que la reducción de los fondos destinados a los programas de rehabilitación de drogas no sólo ha llevado a los usuarios problemáticos de drogas a las calles, sino que también ha aumentado las tasas de SIDA entre ellos, la financiación gubernamental para esos programas debe restablecerse a niveles previos a la crisis. Respecto a las responsabilidades de los gobiernos locales, el apoyo a las personas más necesitadas se extiende desde el suministro de ayuda alimentaria hasta la provisión de servicios públicos en los centros de las ciudades

y en el establecimiento de programas de repoblación. Dada la extensión de la xenofobia y de la polarización política en la sociedad griega, los esfuerzos para mantener la estabilidad social requerirán una acción sistemática para fomentar el respeto y aceptación de la diferencia y el rechazo de la violencia hacia los demás. El compromiso con la estabilidad social también requerirá de iniciativas para mejorar los niveles de confianza en las autoridades públicas, por ejemplo promoviendo una supervisión efectiva de la policía y el poder judicial para asegurar el cumplimiento riguroso, oportuno y justo de sus funciones.

Un requisito previo de la gestión de la seguridad urbana, que es a la vez eficaz y progresiva, es la apreciación por los líderes políticos de la gama de políticas y prácticas que pueden servir a este fin en combinación con otros. El reconocimiento de la multidimensionalidad de los desafíos de seguridad urbana es un paso necesario para el diseño de respuestas que abarquen la coordinación entre los ministerios y otras instituciones estatales, así como la identificación y cooperación con un conjunto adecuado de interlocutores sociales. Hasta la fecha, y como en otras partes de Europa (Edwards et al., 2013), si bien las respuestas progresistas a los desafíos de la seguridad urbana han recibido un reconocimiento positivo entre los líderes políticos, sin embargo, estas se han limitado en gran medida al nivel retórico. Como hemos demostrado, por ejemplo, las iniciativas de Policía de Barrio y las políticas respetuosas de los derechos humanos se han asociado, respectivamente, a actividades policiales regulares y operaciones de ‘barrido’ contra inmigrantes. A pesar que la posibilidad de superar los obstáculos para una formulación más progresista de políticas parece muy escasa en el actual clima político y económico, una combinación adecuada de estímulo y presión de los escenarios nacionales e internacionales podría estimular la voluntad política de explorar seriamente tales ideas y ponerlas en práctica ●

Bibliografía

- AI (Amnesty International) (2012). *Police Violence in Greece*. London: AI.
- Andronikidou, A. y Kovras, I. (2012). Cultures of rioting and anti-systemic politics in southern Europe. *West European Politics*, 35(4): 707–725.
- Arapoglou, VP. y Maloutas, T. (2011). Segregation, inequality and marginality in context: The case of Athens. *Greek Review of Social Research*, 136(C): 135–155.

- Arapoglou, VP. y Sayas, J. (2009). New facets of urban segregation in southern Europe: Gender, migration and social class change in Athens. *European Urban and Regional Studies*, 16(4): 345–362.
- Basille, O. y Kourounis, A. (2011). *Greece: Is the Crisis in Greece a Chance for Its Media?*. Paris: Reporters Without Borders.
- Campaign for Access to Asylum in Greece (2012). *The Campaign for Access to Asylum in the Attica Area*. Athens: Greek Council for Refugees.
- Cheliotis, L.K. (2012). Suffering at the hands of the state: Conditions of imprisonment and prisoner health in contemporary Greece. *European Journal of Criminology*, 9(1): 3–22.
- Cheliotis, L.K. (2013). Behind the Veil of Philoxenia: The Politics of Immigration Detention in Greece. *European Journal of Criminology*, 10(6): 725-745.
- Cheliotis, L.K. y Xenakis, S. (2010). What's neoliberalism got to do with it? Towards a political economy of punishment in Greece. *Criminology and Criminal Justice*, 10(4): 353–373.
- Cheliotis, L.K. y Xenakis, S. (2011). Crime, fear of crime and punitiveness. In: Cheliotis L.K. y Xenakis, S. (eds). *Crime and Punishment in Contemporary Greece: International Comparative Perspectives* (pp. 1-43). Bern: Peter Lang AG.
- CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) (2011). *Public Statement Concerning Greece*. Strasbourg: Council of Europe.
- Danopoulos A.C. y Danopoulos C.P. (2004). Albanian migration into Greece: The economic, sociological and security implications. *Mediterranean Quarterly*, 15(4): 100–114.
- EC (European Commission) (2012). *EU Employment and Social Situation: Quarterly Review*, junio 2012. Brussels: EC.
- Edwards A., Hughes G., y Lord, N. (2013). Crime prevention and public safety in Europe: Challenges for comparative criminology. In: Body-Gendrot S., Lévy R., Hough M., Snacken S., y Kerezi, K. (eds). *The Routledge Handbook of European Criminology*. Oxford: Routledge.
- ELSTAT (Hellenic Statistical Authority) (2012). *Labour Force Survey: August 2012*. Press release, 9 November.
- Featherstone, K. y Papadimitriou, D. (2008). *The Limits of Europeanization: Reform Capacity and Policy Conflict in Greece*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Financial Times (2012). *Greece struggles to end far-right attacks*. 18 October.
- Getimis, P. y Grigoriadou, D. (2004). The Europeanization of urban governance in Greece: A dynamic and contradictory process. *International Planning Studies*, 9(1): 5–25.
- HLHR (Hellenic League for Human Rights), KEMO (Minority Groups Research Centre) e Institute for Rights, Equality and Diversity (2010). *Racist and Related Hate Crimes in the EU: Greece Country Report*. URL (accessed 21 January 2013): http://www.i-red.eu/resources/publications-files/raxen-ts-2010_racist-hate-crimes-in-greece.pdf.
- Hough M., Jackson, J. y Bradford, B. (2013). The governance of criminal justice, legitimacy and trust. In: Body-Gendrot S., Lévy R., Hough M., Snacken S., y Kerezi, K. (eds). *The Routledge Handbook of European Criminology*. Oxford: Routledge.
- HRW (Human Rights Watch) (2012). *Hate on the Streets: Xenophobic Violence in Greece*. URL (accessed 21 January 2012): <http://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0>.
- Hurriyet Daily News (2012). *Athens mosque plans 'hit by financial crisis'*. 10 October.
- Ipsilantis P., Batis N., Kantas D., Papadopoulos, I. y Trevelas, T. (2012). Experiences gained from the implementation of quality management processes at a Greek higher education institution. In: Bollaert L et al. (eds). *Quality and Trust: At the Heart of What We Do* (pp. 36-45). Belgium: European University Association.
- Kandyli, G. y Kavoulakos, K.I. (2011). Framing urban inequalities: Racist mobilization against immigrants in Athens. *Greek Review of Social Research*, 136(C): 157–176.
- Karyotis, G. y Patrikios, S. (2009). Religion, securitization and anti-immigration attitudes: The case of Greece. *Journal of Peace Research*, 47(1): 1–14.
- Kathimerini (2012). *The police are less well armed*. 2 September [in Greek].
- Keridis, D. y Sfatos, C. (1998). Greek higher education: The challenge of reform. In: Keridis, D. y Sfatos, C. (eds). *Greek*

- Higher Education: Prospects for Reform (pp. 173-179). New York: Pella.
- Kostakos P (2007) The threat of Islamic radicalism to Greece. *Terrorism Monitor*, 5(15).
- Ladi, S. (2006). The role of experts in the reform process in Greece. In: Featherstone, K. (ed.). *Politics and Policy in Greece* (pp. 57-74). Abingdon: Routledge.
- Lambropoulou, E. (2012). The emerging 'zones sensibles' in Athens' heart. *RIEAS*, 28 July. URL (accessed 21 January 2013): <http://rieas.gr/research-areas/global-issues/balkan-studies/1821-the-emerging-zones-sensibles-in-athens-heart.html>.
- Maloutas, T. (2009). Urban outcasts: A contextualised outlook on advanced marginality. *International Journal of Urban and Regional Research*, 33(3): 828–834.
- Maroukis, T. (2012). Update report Greece: The number of irregular migrants in Greece at the end of 2010 and 2011. *Clandestino Database on Irregular Migration*. URL (accessed 21 January 2013): <http://irregular-migration.net>.
- Matsaganis, M. (2012). Social policy in hard times: The case of Greece. *Critical Social Policy*, 32(3): 406–421.
- Mawby, R.I. (2011). Commentary. In: Cheliotis L.K. y Xenakis, S. (eds). *Crime and Punishment in Contemporary Greece: International Comparative Perspectives* (pp. 491-503). Bern: Peter Lang AG.
- Neoi Fakeloi (2012). *Nikos Dendias on Neoi Fakeloi*. 16 October [in Greek]. URL (accessed 21 January 2013): <http://folders.skai.gr/main/theme?id=321&locale=el>.
- Papadimitriou, A. (2011). *The enigma of quality in Greek higher education*. Doctoral thesis, University of Twente.
- Papadopoulos, T. y Roumpakis, A. (2009). *Familistic welfare capitalism in crisis: The case of Greece. Working Paper 9–14*. Bath: European Research Institute, University of Bath.
- Pesmazoglu, S. (1994). Government, ideology and the university curriculum in Greece. *European Journal of Higher Education*, 29(3): 291–304.
- Psarras, D. (2012). *The Black Bible of Chrysi Avyi*. Athens: Polis [in Greek].
- SKAI (2012) *N. Dendias on Immigration*. 6 August [in Greek].
- Tzanelli, R. (2011). Islamophobia and Hellenophilia: Greek myths of post-colonial Europe. In: Sayid, S. y Vakil, A.K. (eds). *Thinking Through Islamophobia: Global Perspectives* (pp. 213-230). New York: Columbia University Press.
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2012). *Statistics on Crime*. URL (accessed 21 January 2013): <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html#crime>.
- US Embassy in Athens, Greece (2012). *Security message: Safety and security in Greece*. 16 November.
- Valinakis, Y. (2012). *Greece's European Policy Making. GreeSE Paper 63*. London: Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, London School of Economics and Political Science.
- Xenakis, S. (2004). International norm diffusion and organised crime policy: The case of Greece. *Global Crime*, 6(3–4): 345–373.
- Xenakis, S. (2012). A New Dawn? Change and continuity in political violence in Greece. *Terrorism and Political Violence*, 24(3): 437–464.
- Xenakis, S. y L. K. Cheliotis (2013). Crime and Economic Downturn: The Complexity of Crime and Crime Politics in Greece since 2009. *British Journal of Criminology*, 53(5): 719-745